

PALABRAS DE VICTOR L. URQUIDI, PRESIDENTE DEL
COLEGIO DE MEXICO, EN LA SESION INAUGURAL
DE LA SEXTA ASAMBLEA GENERAL DEL
CONSEJO LATINOAMERICANO DE CIENCIAS SOCIALES

(México — noviembre, 1972)

Ante todo deseo expresarles mi fraternal bienvenida a esta Sexta Asamblea de nuestro Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Lo hago en nombre de los centros e institutos mexicanos ya afiliados a CLACSO y de algunos más que tal vez próximamente deseen colaborar en esta gran empresa. Para nosotros, CLACSO es la expresión de nuestra afinidad, en las ciencias sociales, con toda América Latina; es la expresión de nuestro deseo de contribuir, mediante estrecha cooperación, al engrandecimiento de nuestros pueblos a través del estudio de nuestros problemas económicos, sociales y políticos para colaborar en su solución. Sea, pues, ésta una oportunidad muy especial para esperar de todos una fructífera participación en las actividades de CLACSO y de desearles feliz estancia en México.

Nos encontramos ante una perspectiva incierta y difícil. Pese al propósito inicial de nuestro Consejo de impulsar la investigación en las ciencias sociales latinoamericanas —y no obstante el empeño de los centros e institutos afiliados, cuyo número ha aumentado considerablemente desde la creación del Consejo en Bogotá en 1967—, las condiciones generales necesarias para la irrestricta actividad académica y de investigación distan mucho de ser satisfactorias. En América Latina, en algunos de nuestros países, tal vez la mayoría, casi no existen las condiciones mínimas. La labor esencialmente crítica del científico social no es apreciada, y aun es perseguida.

Tal pareciera que quienes mandan no quisieran saber acerca de la sociedad que creen mandar, como si fuera posible abstraerse de la realidad —una realidad tan compleja que pocos la han descifrado, y aún menos han podido prever hacia dónde va. La negativa a apoyar las ciencias sociales es una actitud anticientífica que no llevará a ningún lado, o mejor dicho, a la continua pérdida de nuestras libertades y nuestros valores. Es necesario, a toda costa, insistir en nuestro propósito de ahondar en el conocimiento de nuestra realidad social, económica y política, a fin de aportar elementos que permitan crear las condiciones de bienestar material, justicia social y libertad espiritual a que todos aspiramos.

Debemos reconocer, por otro lado, que el panorama no es totalmente negativo. En algunos de nuestros países se han producido por tradición de muchos años y como resultado de cambios políticos recientes, condiciones más favorables a la crítica y a la investigación científica social. Cuando hablo de cambios políticos me refiero al hecho de que las actividades académicas y la investigación no operan en ningún país en el vacío. Requieren de un ambiente propicio que valore, primero, por parte del gobierno y de la comunidad, la investigación y el saber como tales, y, en segundo, que acepte las consecuencias de cualquier descubrimiento, así sea en el terreno de las ideas o de los hechos —lo cual puede comportar crítica a lo conocido, a las actividades sociales y económicas, al sistema político, a la versión oficial de la historia o a cualquier otro aspecto de la realidad. En este sentido, el científico social no puede evitar involucrarse y comprometerse en el cambio social, aunque de allí a la participación activa o militante hay un trecho muy grande y que implica actuar bajo otra categoría.

Quisiera insistir un poco en la necesidad de contar con un ambiente propicio. ¿Qué significa? Significa que en nuestros países, caracterizados entre otras cosas por una excesiva dependencia económica y cultural respecto a los países llamados desarrollados, es necesario, para poder actuar con autonomía, comprender muy bien nuestros fenómenos prescindiendo de ideas preconcebidas, de modelos teóricos y aun de métodos de investigación que hayan sido desarrollados en otras sociedades para el estudio de condiciones distintas. Sin rechazar lo que pueda ser útil, es preciso no caer en la fácil imitación de esos esquemas. Esto quiere decir que se requiere modificar la formación profesional de nuestros científicos sociales e innovar tanto en la teoría como en la investigación empírica. Ello debería ser, idealmente, parte de una reforma de fondo de los sistemas educativos, porque la formación a niveles preuniversitarios determina muchas veces el pensamiento y los métodos de trabajo posteriores. Pero aún en el solo terreno universitario, es mucho lo que podría hacerse. No me refiero, por supuesto, a adoctrinamientos en tal o cual sentido; me refiero a la creación

de la capacidad crítica y analítica necesaria, que supone planteamientos y enfoques distintos a los habituales, métodos de enseñanza adecuados, preparación de materiales de estudio y de investigación, inclusive libros de texto y manuales, creación de buenas bibliotecas, e integración de personal docente debidamente adiestrado. Como es obvio, distamos mucho en América Latina de haber alcanzado esta situación y los 150.000 o más estudiantes de las ciencias sociales no se preparan como convendría.

En este proceso de cambio, deben desempeñar un papel primordial los programas de estudio a nivel de postgrado, pues es allí donde se formarán los futuros investigadores y profesores. Nuestro Consejo ha emprendido un importante proyecto destinado a esclarecer la situación que prevalece, a enumerar los recursos propios con que contamos y a esbozar posibles programas de postgrado, teniendo en cuenta los pocos que ya existen, para dar fuerte impulso a este nivel de estudios. Ello sería sobre la base de que las instituciones que estén en posibilidad de hacerlo asignen mayores recursos a la formación e investigación y abran en mayor grado sus programas al acceso necesario que deben tener a él estudiantes y participantes, así como profesores e investigadores, de toda América Latina. Pero también pueden ser necesarios recursos complementarios de fuentes latinoamericanas, públicas y privadas, así como de las instituciones internacionales que convengan, sobre todo en el período formativo y de investigación. De nuevo, esto no significa rechazar la formación que se puede adquirir fuera de América Latina. La mayor parte de los investigadores latinoamericanos en ciencias sociales se han formado en parte en el exterior y no sería sensato impedir que se aprovecharan los grandes centros de enseñanza e investigación extranjeros, aun cuando sería preferible que se utilizara con sentido crítico lo que puedan enseñar u ofrecer y dentro de programas bien definidos de las instituciones latinoamericanas.

No debemos hacernos ninguna ilusión respecto al costo de cualquier programa de estudios de postgrado. Crear centros académicos de alto nivel requiere de personal de tiempo completo o dedicación exclusiva, de excelentes bibliotecas y centros de documentación con personal especializado, de abundantes presupuestos para investigación empírica, de centros de computación y de recursos para becar estudiantes y participantes. Hacer todo esto con los raquíticos presupuestos con que tienen que trabajar algunas instituciones latinoamericanas sería tener por mira la mediocridad en lugar de la excelencia. La formación y la investigación de postgrado en las ciencias sociales deberían tener igual prioridad que la que van teniendo en muchos de nuestros países las ciencias exactas y naturales y la investigación tecnológica. Un centro de ciencias sociales no tiene por

qué ser inferior a uno de energía nuclear. A través de los consejos nacionales de ciencia y tecnología o por otros medios debe buscarse la manera de dar el apoyo financiero necesario, a la par que se desenvuelvan programas adecuados. Quienes apoyen a las ciencias sociales no deben pretender, además, resultados inmediatos de los programas de formación e investigación, pues tampoco son de esperar en las ciencias exactas —por más que hay muchas experiencias de trabajo útiles en que la aportación de la investigación económica, sociológica o antropológica ha sido valiosa para orientar estrategias y decisiones de las autoridades públicas. Casi sobra decir, pero cabe recalcarlo, que cualquier apoyo del sector público o internacional que se preste a los programas de docencia e investigación de postgrado debe respetar la autonomía y la libertad intelectual y académica de los centros que los emprendan.

¿Podríamos en América Latina llegar a estas metas en cada país sin coordinación ni ayuda? Es posible que sí, en algunos países. Pero el mérito especial de nuestro Consejo, en sus cinco años de vida, ha sido el de mantener a sus centros e institutos miembros en contacto unos con otros, crear conciencia de nuestras deficiencias y nuestras aciertos, y promover formas específicas de cooperación, sobre todo a través de las Comisiones de Trabajo. Tal vez nuestro Consejo no haya progresado suficientemente hacia las metas que nos trazamos en Bogotá, pero no cabe duda que sin el esfuerzo coordinador de su Secretaría Ejecutiva estaríamos aún más alejados de ellas. No tenemos sino que mirar alrededor de esta sala para darnos cuenta de que algunos de nosotros nos encontramos por primera vez en uno o dos años. No deseo menospreciar la labor de las Comisiones de Trabajo, mas reconozcamos con honradez que no todas se han desempeñado con eficacia. Se ha dicho ya y habrá que reiterarlo: CLACSO no será más de lo que quieran sus propios centros e institutos miembros, o sea, en el fondo, sus individuos componentes. A la voluntad, al interés y al entusiasmo de éstos se deberán, más que nada, los resultados que se vayan obteniendo. La tarea por delante es muy grande aún, y en ella es preciso que demos el respaldo moral y financiero que necesita nuestra Secretaría Ejecutiva para desempeñar las funciones que le hemos asignado y que con tanto acierto lleva a cabo nuestro buen amigo y compañero Enrique Oteiza.

Será ésta una oportunidad para examinar con sentido crítico nuestros programas y métodos de trabajo. Los centros e institutos participantes deberán darse cuenta de lo hecho y dar orientaciones para el trabajo futuro. El número de comisiones de trabajo, la frecuencia de sus reuniones, su integración, sus objetivos y programas, deberán, creo yo al menos, ser objeto de revisión si fuere necesario. La frecuencia de nuestra Asamblea

General y el contenido de la misma pueden también requerir algún comentario. Es posible que una reunión bienal sea preferible a una anual y que debamos aprovecharla para discutir temas sustantivos concretos, divididos en pequeños grupos, más que para tratar temas muy generales en gran asamblea de socios. Al Comité Directivo le sería muy útil conocer la opinión de los miembros al respecto.

Quisiera referirme, por último, al hecho de que esta Sexta Asamblea se lleve a cabo en México. Nos complace mucho al grupo de centros e institutos mexicanos de CLACSO contar con esta oportunidad de responderles, aunque sea en forma insuficiente, a la hospitalidad que nos han brindado anteriormente las instituciones de Colombia, Perú, Chile y Argentina —sin olvidar a Venezuela en aquella trascendental reunión preliminar de 1966. Pero además, esperamos que puedan apreciar el gradual cambio que se está produciendo en las ciencias sociales mexicanas, con diversidad de planteamientos y de estilos, en centros académicos de diversa índole. No cabe duda que las ciencias sociales en México han alcanzado mayor madurez y que, desde distintos ángulos, tienden a entrar en relación con la realidad nacional y latinoamericana y a contribuir, en diversas formas, al estudio y a la solución de problemas de nuestra sociedad. En los campos de la sociología, la ciencia política, la economía, la antropología social, la demografía y los estudios urbanos y regionales, el volumen y —si se me permite decirlo— la calidad de los trabajos han venido aumentando. Lo comprueban las investigaciones hechas y en curso, y las publicaciones ofrecidas a la crítica pública. No poco de lo logrado se debe a la tenacidad de los científicos sociales, aún en aquellos momentos en que las condiciones han sido adversas. Justo es reconocer que actualmente los centros de investigación y enseñanza cuentan con mucho mayor apoyo material y moral del poder público, a través de los procedimientos administrativos y legales que correspondan, y observar que se les pide mayor participación en las tareas nacionales, sin menoscabo de su autonomía. Se está creando un ambiente, que esperamos sea duradero, de mutuo respeto entre el sector académico y el sector público. Las tareas de uno y otros son distintas y así conviene que sean; pero pueden interactuar con eficacia si, ante todo, se acepta y se reconoce el papel del intelectual como crítico de la sociedad. El que pueda el intelectual ser reformador o constructor de la sociedad es otra cosa; algunos tendrán esa aptitud y otros no. Lo fundamental es que esté en condiciones de expresarse y de ser escuchado. En el caso del científico social, con apego a las normas que su disciplina le impone en cuanto sea ciencia, debe hacerlo con honestidad y con vocación hacia el conjunto que llamamos sociedad, y es sin duda necesaria su mayor participación en la formación de la sociedad futura.

Bien puede ser que no todos estemos de acuerdo con lo que en esta ocasión me he permitido expresar —ni aun dentro del grupo mexicano de participantes, cuya opinión no estoy autorizado a representar. Ofrezco estas reflexiones a título personal solamente. Si la ciencia social está en crisis en América Latina, como comunmente se dice, no será con lamentaciones como saldremos de la crisis sino enfrentándonos con optimismo a los problemas de nuestra ciencia, por una parte, y, por otra, a las situaciones particulares de nuestros países y, solidariamente, a las de nuestra comunidad latinoamericana.